**PALABRAS DE PRESENTACIÓN
DE LA ACADÉMICA
DRA. CECILIA SOSA GÓMEZ.**

Bajo el auspicio de nuestra Academia de Ciencias Políticas y Sociales saludo al presidente Humberto Romero-Muci, compañeros de Junta Directiva y a todos los Académicos de esta Corporación, también al Centro para la Integración y el Derecho Público que dirige el abogado Antonio Silva, y el apoyo decidido de la Fundación Konrad Adenauer para editar el libro que hoy formalmente presentamos titulado ¿Qué Hacer con la Justicia?

De manera que manifestamos nuestro agradecimiento en la persona representante en Venezuela Maximilian Hedrich, y ahora a la Señora Annette Schwarzbauer quien inicia la representación en Venezuela.

Este texto fue coordinado junto al Académico Jesús María Casal, y recoge los trabajos presentados en el Foro del mismo nombre, que organizó esta Academia, realizado en nuestra sede del Palacio el día 09 de mayo de 2019. Esta iniciativa atrajo el interés de miembros de esta academia, profesores universitarios, investigadores, abogados con experiencia en el poder judicial y en el ejercicio profesional y muchos estudiantes.

Lo que me emociona de esta obra es la actualidad del tema por cuanto sin Justicia no tendremos Democracia; y en razón de ello, deseo dedicar mis palabras en el corto tiempo del que dispongo, para destacar de manera muy resumida las materias que libremente investigaron los ponentes del encuentro que se agrupan en este libro.

El libro se inicia con las palabras de presentación del presidente de la Academia **Humberto Romero-Muci**, para luego el Secretario Ejecutivo del Bloque Constitucional de Venezuela, profesor **Perkins Rocha** identificar en su exposición cuál es la verdadera esencia de nuestro problema con la justicia y que podemos resumir en el siguiente párrafo:

Para reinstitucionalizar la justicia dice, es necesario crear un nuevo vínculo entre el ciudadano común y corriente, y la justicia, no apartándolo del centro de decisiones judiciales, sino especialmente cultivando una cultura ciudadana democrática. Vinculando el hecho judicial de manera común con las prácticas sociales y viceversa. Diría que su mensaje se resume en “Todos necesitamos Justicia”.

El Académico Rafael Badell Madrid desarrolla la justicia constitucional y el control de constitucionalidad; cómo nacen y se desarrollan en otros países y luego lo que ocurre en el desarrollo constitucional en Venezuela, ello nos permite entender lo que ha sucedido con la creación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 1999, quien ejerce sus competencias sin control alguno, calificando su actuación de dictadura constitucional. Razona y propone una Corte Constitucional fuera del Poder Judicial, que actúe de manera autónoma e independiente, en instancia única, con medios de impugnación limitados, tasados y definidos por la propia Constitución.

El Académico Jesús María Casal examina el papel que deberá jugar la jurisdicción constitucional en el escenario de recuperación democrática, ya que la experiencia comparada indica que en la transición a la democracia, los tribunales constitucionales suelen contribuir decisivamente al desmontaje de las estructuras y de los criterios autoritarios que intentan persistir a pesar de la transformación política. Razona la necesidad de levantar un inventario de instrumentos probados en sistemas democráticos, que hayan funcionado como factores efectivos de contención de procesos tendencialmente autoritarios, acompañado de programas destinados a consolidar una cultura de la democracia y el Estado de Derecho.

El Profesor Raúl Arrieta, plantea con profundidad la constitucionalización del derecho y los caminos sobre los cuales se desarrolla. Lo considera un fenómeno inédito en la formulación de nuevas constituciones del último medio siglo. Advierte que no se puede estudiar una Constitución sin tener presente cuál es su contexto socio/político, cultural, ético, histórico y no como un documento escrito que fija el

marco de actuación del poder. Aborda los efectos de la constitucionalización, la efectividad de la misma, y cómo se produce el cambio en el sistema de fuentes o de producción de normas y la importancia de que la jurisprudencia constitucional sirva para la difusión de las normas constitucionales y la impregnación del orden jurídico.

El Académico Ramón Escobar León, examina la fuerza del carácter vinculante de la sentencia para la toma de la decisión judicial. Analiza la delimitación del precedente constitucional y lo asocia con el precedente, en el sentido de los alcances entre los casos a los fines de que los tribunales sigan las decisiones previas que han resuelto el punto objeto de su decisión. Es así que la aplicación dependerá de la similitud o diferencias fácticas entre el caso en el cual se aplicó el precedente y aquél en el cual se va aplicar en el futuro. Luego desarrolla las doctrinas sobre el precedente constitucional y aborda la interpretación tal como la ha entendido la Sala Constitucional, para concluir cómo el precedente constitucional limita el poder legislativo si le es vinculante. Por tanto, ante la situación real política del país examina los límites a la interpretación constitucional que han sido ignorados absolutamente en nuestro país.

La Profesora María Concepción Molino Saavedra, concentra el análisis en la transfiguración de la Constitución, por las decisiones de recursos de interpretación constitucional realizados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Determina la magnitud de los cambios operados en el texto constitucional, y prueba luego del análisis de las sentencias dictadas, cómo la mutación constitucional entre 2013 a 2018 la transformación de la realidad jurídica y la normatividad constitucional transfigurando nuestra carta fundamental, por tanto no constituye mutación constitucional, más bien esas sentencias de interpretativas del texto constitucional han acabado con la doctrina democrática de la Constitución venezolana y la supremacía constitucional.

El Académico José Guillermo Andueza y el profesor José Salvuchi Salgado, abordan el tema de la autonomía parlamentaria,

los actos privativos y su tratamiento en la Constitución del 61 y en la del 99. Argumentan que el poder legislativo tiene que actuar sin trabas ni interferencia en su funcionamiento y que sus limitaciones son las establecidas en la Constitución para luego demostrar cómo se violentó la autonomía parlamentaria (analiza a tales fines la sentencia 260 de la Sala Electoral del TSJ de 30/12/2015) en particular la potestad del cuerpo legislativo para la calificación de sus integrantes.

La Académica Hildegard Rondón de Sansó, propone modificaciones al sistema constitucional y legal del TSJ. Critica el bicefalismo del Tribunal, examina lo que sería el gobierno del poder judicial, analiza la normativa sobre dirección, gobierno y administración dictadas por el TSJ y los mecanismos utilizados por el máximo tribunal para asumir la conducción de toda la estructura organizativa a los fines de mantener el control absoluto del poder judicial. Propone la eliminación de la Sala Electoral y razona la pertinencia de una Corte Constitucional.

La Profesora María Amparo Grau, plantea como tema los términos constitucionales de la Justicia Militar; luego de un análisis de los antecedentes constitucionales, determina que la Constitución de 1999, por una parte establece que los delitos que comprendan violaciones a los derechos humanos y lesa humanidad están excluidos de la jurisdicción militar; y al mismo tiempo consagra que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar, dejando abierta la posibilidad de juzgamiento de civiles por delitos militares, lo que estaba proscrito en forma tajante en constituciones anteriores. El Juez natural prevalece en la Constitución de 1999 como garantía del debido proceso y por tanto la justicia militar se aplicaría únicamente a personas bajo fuero militar (activos); es decir la aplicación de leyes militares de delitos de naturaleza militar excluidos los delitos comunes, justificándose en la infracción de los deberes militares. La propuesta de este estudio está enmarcada en la restitución de la justicia en el país aun cuando se concreta en eliminar la justicia militar, se proscriba en tiempos de paz, y se incluya como delito la violación de derechos humanos el uso de la institución militar, su régimen disciplinario, sus recursos o medios de castigo contra la población civil. Igualmente se propone

suprimir la competencia de un componente militar como la Guardia Nacional en actividades de policía para el mantenimiento del orden interno del país en tiempos de paz.

La Académica Cecilia Sosa Gómez, ubica y analiza el derecho de participación libre en los asuntos públicos como forma de integración de la sociedad a la organización y estructura del Estado, al estar incorporada a la lista de los derechos humanos. En el caso específico del poder judicial y el sistema de justicia, se determina cómo se participa y para qué, iniciándose por la premisa expresa y novedosa en nuestro país de que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos. Se propone sustituir la actual Ley del Sistema de Justicia para establecer la verdadera organización de las relaciones funcionales entre los órganos que lo componen, excluyendo al poder Ejecutivo quien lo rige actualmente e incorporando al sistema tanto a los abogados como a los ciudadanos.

La Ex Juez María Luisa Acuña, centra el tema de la corrupción del poder judicial considerando que pasa a ser la razón de la destrucción de Sistema de Justicia, permitiéndola; esta violación permanente de uno de los principios fundamentales que le otorgan sustento y soporte a la democracia, como es la independencia. La actividad judicial y la gestión judicial se desenvuelven en las sombras. Cualquier trámite judicial tiene que ser sufragado por el ciudadano. El planteamiento es la urgencia de la reinstitucionalización del Sistema de Justicia, no sólo porque ella va de la mano con la prosperidad económica del país en virtud de la seguridad jurídica que otorga, además por cuanto deriva de la importancia de rescatar la democracia que ha perdido su fortaleza, precisamente por cuanto su institucionalidad judicial fue destruida y desmantelada dando paso a una grosera concentración de poder en manos del Ejecutivo.

El Académico José Antonio Muci Borjas, escoge la Potestad reglamentaria del poder judicial y la desarrolla a partir de las diversas normas constitucionales que asignan potestades reglamentarias; se identifican otras autoridades con potestad reglamentaria que nace de

la autonomía e independencia que les reconoce en la Constitución a determinados órganos. Se concentra en la potestad reglamentaria del poder judicial referida a la organización y funcionamiento del TSJ y la dirección, gobierno y la administración del Poder Judicial. Desarrolla en detalle esta potestad en tribunales superiores, en jueces disciplinarios; concluyendo hasta dónde llega esa potestad y sus limitaciones, afirmando que el reglamento no puede suplir la ley.

El profesor Alejandro González Valenzuela, desarrolla el amparo constitucional como derecho fundamental y da las razones por la cual se encuentra en crisis. Desarrolla las vicisitudes de la institución desde su primera consagración en 1961 hasta la promulgación de la ley especial y el impacto de esta legislación en la Constitución de 1999, así como las mutaciones legales propiciadas por la Sala Constitucional del TSJ. Un aspecto trascendente es el trato que debe darse a la pretensión extraordinaria o subsidiaria en la reforma que requiere de esta ley, las causales de admisibilidad, el amparo conjunto en un juicio ordinario, el tema de la caducidad, acción extraordinaria y subsidiaria de amparo. Concluye en una propuesta de bases, conceptuales y procesales, para adaptarla a una justicia constitucional moderna ya que este texto ha quedado superado por la realidad jurídica de nuestro país.

El Académico Cesar Augusto Carballo Mena, contesta la pregunta ¿cómo se fragua el Estado Social de derecho y se confecciona el compromiso estatal de la satisfacción de las necesidades vitales de la población? Luego lleva adelante las reflexiones que le permiten colocar el énfasis en los trabajadores y la promoción de la libertad sindical. Es decir, avanza en los derechos de organización, negociación colectiva y huelga. Se refiere a la doble vía de tutela del trabajador, estatal y autonómica. Un estado Constitucional de derecho necesariamente está obligado descender del olimpo la norma constitucional y colocarla en la batalla de las relaciones laborales.

El Académico Salvador Yannuzzi, concentra su trabajo en una revisión del vigente Código de Procedimiento Civil para pasar a formular una propuesta que lo sustituya analizando la situación actual y propone

un nuevo Código Adjetivo el cual debe ser un trabajo de especialistas que bien podría ser la Academia de Ciencias Políticas y Jurídicas. Cuestiona el proyecto presentado a la AN por inadecuado y destaca los aspectos sustanciales de una reforma de las regulaciones procedimentales y la urgencia de prepararse para recurrir a los medios alternativos para la resolución de controversias, lo que además descongestionaría los tribunales.

El Académico Humberto Romero-Muci, centra su análisis en los derechos humanos como condición de validez de los tributos, destacando el derecho a contribuir conforme a la capacidad económica efectiva y como parámetro de validez de la tributación en el Estado Constitucional. Aborda la relación entre derechos humanos y la tributación, indica que la tributación puede incidir en el disfrute del salario, el derecho a la vivienda, a la salud, la educación, la libertad de prensa entre otros. El eje del planteamiento es la eficiencia del sistema y desarrolla la técnica normativa de las inmunidades tributarias y de lo que se considera el mínimo vital. Muestra el derecho comparado para proponer criterios en materia de tributación que se alinean con los derechos humanos. En la parte legislativa considera que el Código orgánico Tributario tiene grotescas inconstitucionalidades en detrimento de los derechos de los contribuyentes.

El Profesor Alberto Blanco Uribe Quintero, dedica el énfasis a justicia tributaria como centro del desarrollo del servicio de administración de justicia tributaria que impartido por estos tribunales en el ámbito de las relaciones entre las administraciones tributarias y su equilibrio frente a los derechos de los contribuyentes y otros obligados tributarios; en cuanto a la aplicación de potestades tributarias y su equilibrio frente a los derechos de los contribuyentes, todo en el marco de que la relación jurídico tributaria como una relación de derecho y no de poder. En realidad, es algo más que hablar del contencioso tributario, y de discutir si se paga tributos y la calidad de los servicios que reciba no sean de excelente calidad. Es un deber contribuir con las cargas públicas siempre que se respeten la capacidad contributiva y el principio de legalidad tributaria. Luego de afirmar y constatar que no existe un poder

judicial en Venezuela y por tanto hay que reconstruirlo o reinstitucionalizarlo, derogando las inconstitucionales normativas que regulan el sistema de justicia tributaria sustituyéndolas por regulaciones procesales garantistas.

El Académico Eugenio Hernández-Bretón, explica el derecho procesal civil internacional y cómo esa internacionalidad del supuesto de hecho regulado no es la fuente de la normativa utilizada para regular tales casos o supuestos. Resulta que se aplica a tales casos la normativa doméstica o nacional. Desarrolla el *fórum regit processum* partiendo que las grandes orientaciones del Derecho Procesal Civil Internacional en Venezuela: la ley de Derecho Procesal Privado, mientras el CPC fija la vía procedimental a seguir. De allí desarrolla la jurisdicción de los tribunales nacionales, la eficacia de las sentencias extranjeras y la cooperación judicial trasfronteriza. Concluye en la conveniencia de reformar el sistema en vigor y determina sus contenidos.

El Académico Luis Cova Arria, describe la situación jurídica de la reclamación venezolana sobre la Guayana Esequiba se fundamenta en hechos históricos y geográficos, y ha invocado a su favor documentos entre ellos las Cédulas Reales, que confirman sus derechos históricos desde tiempos coloniales, como título legítimo de su dominio inminente, dado el convenimiento de los repúblicas suramericanas al terminar las guerras de independencia, de conservar los territorios que correspondían a las provincias bajo el dominio España. Luego de relacionar lo ocurrido desde que se firmó el laudo Arbitral de París, hemos llegado a la disputa de la reclamación a la Corte Internacional de Justicia visto que de acuerdo al Secretario General de NU no se logró un acuerdo definitivo a finales de 2017. Se plantean en el estudio los pro y contra de las dos tesis de defensa, una concurrir a la Corte y detallar todos los argumentos jurídicos por los cuales no es competente para conocer de esta controversia o no concurrir. El Estado optó por la segunda, presentando una comunicación señalando que no participará en el procedimiento por cuanto dicho Tribunal es incompetente. No duda el ponente es afirmar que el gobierno de transición pudiera solicitar

suspender el procedimiento al menos por dos años y así prepararse para ejercer la mejor defensa de sus derechos e intereses.

La profesora Milagros Betancourt, fundamenta su postura en cuanto a la Justicia Transicional y su aplicación en Venezuela, en cuatro principios del derecho internacional de derechos humanos: la obligación del Estado de investigar y procesar a los presuntos autores de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y de castigar a quienes resulten culpables; el derecho a conocer la verdad sobre los abusos del pasado y la suerte de las personas desaparecidas, el derecho humanitario a que violaciones graves de derechos humanos a obtener reparación, y la obligación del Estado de impedir y garantizar que tales atrocidades vuelvan a repetirse. La crisis de Venezuela es de gran magnitud, estructural y progresiva; la institucionalidad democrática ha sido destruida, el desempeño democrático ha desaparecido que debe movernos como sociedad unida para reclamar a lo interno del país, por todos los medios el respeto al orden y respeto de las normas fundamentales de los derechos humanos, y exigir el más firme apoyo de la comunidad internacional. Plantea cómo debe abordarse la Justicia Transicional ante un eventual proceso de transición política tal como está fijado en el Estatuto para la Transición a la Democracia dictado por la Asamblea Nacional legítima. El trabajo que nos espera está marcado por reconciliación con justicia para recuperar el país y recomponer la sociedad.

El Académico Román Duque Corredor, comienza por afirmar que los procesos de cambio político de regímenes dictatoriales o totalitarios hacia la democracia y la libertad suponen nuevas visiones para el derecho y la Justicia. El enfoque jurídico para responder a períodos de represión y de violaciones de derechos humanos, lo retrospectivo, para buscar soluciones jurídicas para un futuro democrático, consideraciones prospectivas permiten encontrar el equilibrio entre el valor de lo ideal de justicia y la realidad política post cambio político para construir un futuro Estado de Derecho que los garantice. Insiste en que la justicia transicional tiene como fundamento el deber del Estado de investigar,

juzgar, sancionar y de indemnizar a las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Por esa razón esta justicia se basa en el acceso a la verdad, tanto para las víctimas como para la sociedad, para conocer las razones que llevaron a los victimarios a actuar de esa manera y el grado de participación del agente en el hecho dañino y que la sociedad conozca la historia de estas violaciones para evitar en el futuro se incurra en las mismas violaciones.

Concluyo:

El libro *¿Qué Hacer con la Justicia?* muestra el empuje de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales por encontrar soluciones y proponerlas. En todos los estudios que contiene y que brevemente describo en estas palabras de presentación encontramos directa o indirectamente el duro que hacer que tenemos por delante, y nos compromete a todos a pasar de las propuestas a la concreción para contribuir sin adornos, en precisar muchos de los temas a resolver para lograr tener seguridad jurídica, Estado de Derecho y Democracia. Además, queremos la resurrección del sentimiento de lo justo y un renovado interés por los grandes temas de la justicia, abordados con un espíritu nuevo, que cuente con el interés de la vida en sociedad, la satisfacción y el disfrute de los derechos humanos y de lo que significa tener acceso a la Justicia, en aplicación y vigencia de la Constitución.

Gracias